

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTCSJNA19-2462:
Fecha: 18-dic-2019
Hora: 10:43:56
Destino: Consejo Secc. Judic. de Nariño
Responsable: DAVID ENRIQUEZ, HERNAN
No. de Folios: 15
Password: C37B31A7

PROYECTO DE COLEGIO / AYUDA AL DERECHO PÚBLICO
TRIEMUNAL ADMINISTRATIVO - NARIÑO
SICA - CÁRITAS

1997

en el Paseo cuando no recuerda

el año 2000.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - TRIEMUNAL ADMINISTRATIVO
ACUERDO DEL CONSEJO - ACCIÓN DE LA JUDICATURA-SALA
CONSTITUCIONAL

En su escrito de 12 de diciembre de 2019, el Dr. David Enriquez, Declaró que el acuerdo del consejo de la judicatura en su calidad de secretario general del organismo, no se ha cumplido con lo establecido en el artículo 1º, numeral 1º, inciso b) de la ley 1700 de 2014, que establece que el acuerdo debe ser publicado en el diario oficial de la nación o en su sitio web, dentro de los 15 días siguientes a su expedición, y que el acuerdo debe ser publicado en el sitio web de la judicatura dentro de los 15 días siguientes a su expedición, en su caso, en su sitio web visible con su nombre y que puebla intervenir en la publicación de acuerdo al acuerdo de la comisión que es el interesado en hacerse cargo de la ejecución del acuerdo.

En su escrito,

que la manera más respetuosa y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de la comisión constitutivo de Nariño en su día fechado 13 de diciembre de 2019, me permite informar que en el acuerdo establecido para el día 12 de diciembre de 2019 se establece un informe de acuerdo a lo establecido en el punto 1º de la comisión constitutiva de la comisión de la Rama judicial, en el cual se establece que el acuerdo debe ser publicado visiblemente con su nombre y que puebla intervenir en la publicación de acuerdo al acuerdo de la comisión que es el interesado en hacerse cargo de la ejecución del acuerdo.

En su escrito, el Dr. David Enriquez, Declaró:

“...”

JOHNNY ANDRES ENRIQUEZ GUALEZ

DECANAL MAYOR

EL CONTENIDO DE ESTA CARTA ES DE CICLO, NO DE CLASE Y MAGISTERIO
NO ES OFICIAL

University of
California

Conclusions

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ESTADO DE ATLÁNTICO DEL RÍO DEL PLATA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
SIGLO XIX

10. *Urtica dioica* L. (Urticaceae) - *Common Nettle*

TRUE SENSE COMMUNICATIONS INC. 1000 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.

Notifica por AVISO a los miembros de la comunitad en general, el juzgado de lo Penal de la HABILIDAD - JURISDICCION N° 1, tel. 23-33-0000 ext. 105, dentro el término de un mes, presentado por el señor - GOMEZ EN SEGURA CASIQUIL en contra de JUAN CARLOS SINISTRARIO, ASESINO AGRAVADO DEL FISCAL PABLO ALBERTO PEREZ, quien a su vez correspondió en reparto al H. Magistrado, Dr. PAULO GONZALEZ RANTICIA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Magistrado Ponente: Paulo León España Pantoja

Asistencia: Admite demanda- Niega la suspensión Provisional del Acto.

Medio de Control: Nulidad Electoral

Instancia: Única

Demandante: OSME JAVIER SEGURA CABEZAS

Demandado: JUAN CARLOS SINISTERRA ANGULO

Acta #: Escrutinio Formulario E26 ALC
Del 1 de Noviembre de 2019.

Radicado: 52-00123-33-000-2019 - 00611-00

Tema: Admite la demanda.

Auto: 2019-854-APO

San Juan de Pasto, trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Se acuerda el Tribunal a pronunciarse sobre la admisión de la demanda por el señor OSME JAVIER SEGURA CABEZAS, por intermedio de apoderada, haciendo uso del medio de control de nulidad electoral, en contra del Acta de Escrutinio formulario E-26 ALC de 01 de noviembre de 2019, que declaró la elección del señor JUAN CARLOS SINISTERRA ANGULO, como Alcalde del Municipio de Roberto Payán (Nariño), por el periodo 2019-

Dicho indicarse que mediante auto de fecha 03 de diciembre de 2019, se inició la demanda para efectos de que se corrigiera sobre las precisiones de la demanda, el concepto de violación y los hechos.

El requerimiento devino en razón a que con la demanda se trajeron dos remisiones, del 03 de noviembre de 2019 (fls. 72 a 81), dirigidas a los Delegados del Consejo Nacional Electoral para el Departamento, en concordancia con las normas referenciadas en el auto que inadmitió la demanda.

En tanto escrito radicado el 09 de diciembre de 2019, la parte actora presentó subsanación de la demanda, en relación con el concepto de violación y los hechos. Sin embargo en relación con las precisiones, no hizo una explicación de las peticiones presentadas, sin indicar si las demandadas o no, ni si las frente a las mismas son demandadas. Adicionalmente omite presentar la demanda de forma integrada.

De esta manera, dado que la demanda no fue totalmente corregida, se rechazada parcialmente. Siendo admitida en lo que tiene que ver con la declaratoria de nulidad del Acta de Escrutinio formulario E-26 ALC de 03 de noviembre de 2019, que declaró la elección del señor JUAN CARLOS SIN TIERRA ANGULO, como Alcalde del Municipio de Roberto Payán (Nariño), por el periodo 2020-2023.

2. Por otro lado, por tratarse de una acción de nulidad electoral, en el cual se convierte un posible interés de la comunidad y atendiendo a lo previsto en el art. 277-5º del CPACA., habrá de ordenarse la publicación de aviso, el cual se publicará por una (1) vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción electoral, informando a la comunidad sobre la existencia del presente proceso, con el fin de que cualquier ciudadano intervenga.

La comunidad podrá intervenir dentro de los cinco (5) días siguientes a la respectiva publicación. Dicho término sin perjuicio de lo contemplado en el art. 228 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala que la intervención del público se administrará hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la audiencia inicial.

Finalmente se ordenará la publicación o informe de la existencia del presente asunto a través de las páginas web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co) y la tijación de un aviso en lugar visible en la sala de audiencias de este Tribunal, a fin de que la comunidad interesada en el caso intervenga si a bien lo tiene, ejerciendo las facultades consagradas en el art. 228 de la Ley 1437 de 2011, en el presente asunto hasta el día indicado anteriormente.

De notarse que según la norma indicada, la mentada publicación debe realizarse en el sitio web del Consejo de Estado. No obstante en otras oportunidades tal publicación ha sido negada por dicho ente. Es el argumento que allá se invita solamente las demandas que se tratan en dicha Corporación. Por ello que tal ordenamiento se hace en la sala de audiencias judicial que ostenta un carácter más general y que allí se establece un vínculo para acceder a la página del Consejo de Estado, lo cual permite en criterio del Tribunal, un mejor acceso a la información que se precisa e brindar sobre la existencia de un procedimiento, como el del caso.

2. Suspensión provisional.

Para el parte demandante en el escrito de la demanda solicita la suspensión provisional del acto demandado (Acta de Escrutinio Formulario Electrónico noviembre de 2009) mediante el cual la Comisión Escrutadora del Distrito de Popayán (Nariño), declaró la elección del señor JUAN

CARLOS SINISTERA ANGULO, integrante del partido Coalición Pueblos Diferentes, como Alcalde por el periodo 2020-2023.

En su requerimiento solicita la sustentación en los hechos la moción documentada en la demanda de nulidad electoral, artículos 175, 288 y 275 numerales 6, 7 y 8 de la Ley 1437 de 2011. De esta manera, indica que en las elecciones llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, se presentaron disturbios y alteraciones al proceso electoral los que desencadenaron que el autor fue constreñido y obligado a votar por un candidato particular (el señor CARLOS SINISTERA ANGULO).

En lo que respecta a ello, refiere que en el Corregimiento de Arteaga (municipio de Mariano), mesa 1, zona 90, se observó una violencia ejercida por el elector, contra el jurado (señor Alexander Alejandro Castillo) y contra el jurado (señor Alejandro Castillo y presencia de grupos ilegales, los cuales ejercieron violencia, entregaron dineros, ingresaron con armas de fuego y vigilaron el recuento de votos. Igual situación ocurrió en el Corregimiento de Gómez Plata, mesa 1, zona 90, precisando que en esta mesa se presentó violencia contra la señora Teresita Alexandra Castillo).

Además señala que los fundos de votación del Corregimiento Gómez Plata, mesa 001, puesto 01, zona 99, gestaron y apoyaron el trámite legal.

Momento agrega que no existió apoyo ni se gestionaron garantías para el proceso electoral.

3.2. Fundamento Constitucional – Art 288- Suspensión de los procedimientos Administrativos- Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El art 288 de la Constitución Política prevé “la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspenderse provisoriamente, por los motivos y con las

los que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que son susceptibles de impugnación por vía judicial".

3.7 Ley 1437 de 2011- artículos 277- Medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo- Nulidad electoral- Caso especial- Artículo 231 *Ibidem*- Presidencia de las mesas electorales- Requisitos para decretaria.

El art. 77 de la Ley 1437 de 2011, norma especial respecto de la prescripción en el caso de actos administrativos de carácter electoral, prevé que "(...) En el caso que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, el juez que se proceda a la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contrario este auto solo procede a los procesos de trámite inicial el recurso de revisión y, en los demás, al recurso de casación".

Otro vez el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 prevé que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos se procederá por citación de las diligencias invocadas en el plazo de 10 días en la demanda que se realice en el trámite separado, cuando tal demanda surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas adjuntas con la solicitud.

La suspensión provisional es una medida que suspende la ejecución de lo general los procedimientos ejecutorio y ejecutivo que revisten al acto administrativo que se demanda, y tiene como propósito proteger los derechos subjetivo que pueden verse afectados con los efectos del acto administrativo que se demanda la nulidad.

Una medida cautelar está instituida como garantía del principio de legalidad que debe revestir toda actuación del administrador y, al más alta celeridad, no debe dejar en el juez dudas sobre su procedencia.

Si existe una medida cautelar accesoria a la petición principal y su decisión es de tal trascendencia que implica resolver con el fiscal o el acusador una cuestión que es objeto de una demanda,

Aunque no debe descuidarse que bajo la nueva normativa que rige sobre medidas cautelares, la figura de la suspensión provisional ha quedado obsoleta, esto es, ya no resulta menester comprobar la existencia de una infracción manifiesta de la ley, es decir, que la exigencia sea una falta calificada de fácil contejo entre el actor demandado y la que se le imputaba desapareció, sin evitar que esta medida quede restringida a excepciones.

En este orden, si se encuentra que evidentemente hay una violación, se procedrá directa e inmediatamente hacia la efectiva tutela judicializando la decisión de la suspensión provisional sin necesidad de resarcir la parte, la finalización del proceso para decidir en la sentencia mediante la cual anule el acto correspondiente.¹

En otra manera, para sujetar los hechos denunciados por la parte acusadora, los actos de injerencia, coerción al elector, coerción coartada, amenazas de votación y presencia de grupos ilegales, los cuales ejercieron control, entregaron dinero, ingresaron con armas de fuego y vigilaron el conteo de votos presentados en las elecciones llevadas a cabo el octubre de 2019, refiere a las denuncias presentadas ante la FGR, en

¹En el Seminario Interacacional del Nuevo Código Administrativo y de la Contingencia Administrativa, Ley 40, C. 7, 10 de junio de 2019.

Alce la voz ante la señora Lorena Alexandra Cañillo Gómez (delegada de un testo de votación) y el señor Edwin Alexander Gómez Cañillo (jurado de votación). Sobre las irregularidades presentadas en los Comisiones de Gómez Juárez y Arteaga Linor, así o refiere a otras pruebas, como las actas del escrutinio de los juzgados, la denuncia llevada ante la Riesgo Electoral (19) Juzgado de lo Contencioso del Defensor del Pueblo.

En el fraude electoral vota para el Poder Judicial una web Facultad de Derecho Panamericana. Esto Germán Maridueña.

En la audiencia del Tribunal que en este momento procesa el caso de la violencia contra la mujer en el distrito de Chorrillos, se invocan las normas invocadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la violación a la Convención Americana y se confronta con las pruebas de las partes. La defensa declina la solicitud dado que las pruebas que obran en el plenario no sirven en este procedimiento y certeza los impuestos allí comisionados. Sin embargo, entre las pruebas las más relevantes para confirmar la violación de los compromisos de la Convención Americana, sobre los hechos en lo, es precisamente la denuncia que la autoridad competente que procedió al procedimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, numeral 1, que dice que cuando se establezca la violación de los derechos humanos, se procederá a la investigación y sanción de los responsables.

En el expediente se observa que el juez del expediente, la jueza López, quien en su calidad de magistrado del Tribunal Gómez Juárez, el 01 de mayo de 1999, gestaron y ordenó el trámite el expediente.

La inconveniencia, a la luz de los fundamentos fácticos que el Tribunal sostiene, hace recaer la solicitud de medida cautelar en el estudio de las normas en que se apoya. La Sala concluye que en esta etapa del proceso no existe certeza con certeza de que sea la violación allegada, todo teniendo en cuenta que para efectuarla, determinar la constitucionalidad o no de la medida implica la realización de un estudio más profundo, teniendo en cuenta las medidas de control que se plieguen en la demanda y sus respectivas implicaciones.

Finalmente, considera el Tribunal que en el presente asunto no se desconocen los derechos a ser elegido y representación efectiva del demandado, e primero que para cumplir con el requisito de cumplimiento político, tanto en el fondo como en la forma, es necesario la autorización del demandado a su participación en la conformación, ejercicio y ejercicio del poder político y garantizar a los demás que la autorización se dé en el cumplimiento del medio de los instrumentos de la voluntad popular que designan a los titulares de la autoridad, y no a las personas que la ejercen. La autorización de la medida cautelar del acto demandado. En ese sentido, se debe garantizar dichos derechos, mientras no se establezca lo contrario en sentencia.

En resumen, del análisis de la causal alegada y las normas invocadas, se deduce que la prudencia invocada, no se encuentra que se configura en virtud de aquella, teniendo en cuenta el Tribunal que documenta sus conclusiones.

Al declarar que la decisión sobre la medida cautelar no interviene en el momento:

Consideración a lo anteriormente expuesto, el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL NARANJO,

RESUELVI

Por la solicitud de cancelación provisional solicitada en la demanda, corresponde declarar:

EL REQUERIDAZAR FARCIALMENTE la demanda que en ejercicio del mejor uso de Nullidad efectuó interpuesta por el señor OSME JAVIER CABELAS CONTRA LA ALCALDIA DE NARANJO, por lo cual, la pretensión es cancelación con los resultados en resueste la reclamación realizada por el actor el día 10 de febrero de 2019.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 113, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos, el señor OSME JAVIER CABELAS CARRASCO en su radio de competencia respecto de la demanda de nulidad de la ordenanza municipal ALC de 10 de noviembre de 2019, que declara la autoridad del señor Alvaro J. LÓPEZ MELLADO, como autoridad competente para la ejecución de la ordenanza mencionada.

En aplicación del artículo 177 de la legislación de PMA, notifico a la señora SARA TAREK Y ELINA ANGULO, que efectúan su domicilio en la dirección respetuosamente al Dr. Juan José Robero (el autorizado), a quien se le informa que no cumple con los requisitos del caso. Se le concede el término de 15 días libres para dar

Para que sea posible la intervención de la autoridad judicial con lo dispuesto en lo establecido en el numeral 2º del artículo 277 del CPAC.

3. La aplicación del artículo 277 de la Ley 1437 de 2001, dentro del procedimiento de la demanda de la denuncia contra el Alcalde Municipal de Roberto Payán (d. Mío), por Intermediación del Registrador Nacional de Estado Civil- Registrador Municipal de Roberto Payán (M.ino).

4. La verificación del cargo Nacional de la diligenciatura en el expediente Civil de la demanda de la demanda.

5. La aplicación del artículo 277 de la Ley 1437 de 2001, dentro del procedimiento de la denuncia contra el Alcalde Municipal de Roberto Payán (d. Mío).

6. La solicitud de la intervención de la autoridad judicial con lo establecido en el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2001, dentro del procedimiento de la denuncia contra el Alcalde Municipal de Roberto Payán (d. Mío).

La comunidad podrá intervenir dentro de los cinco (5) días siguientes a la respectiva publicación. No obstante, dicho término sin perjuicio de lo establecido en el art. 226 de la Ley 1437 de 2001.

La intervención de la autoridad judicial se llevará a cabo en virtud de un informe sobre la existencia del presente proceso en el sitio web de la Corte Judicial (www.cortemagistradal.gov.co) que es visible, con el fin de que pueda intervenir en el mismo.

importante de la convención, presentar informe de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Constitución.

En la Secretaría de Administración del Consejo Superior la diligencia, por acuerdo de quien corresponda, solicitada oportunamente se sirvió incluir la publicación del informe ordenado en esta Oficina. El tipo de publicación incluirá el acuerdo mandatorio de la demanda.

Finalmente se dispone la misma publicación en lugar visible en la Secretaría del Tribunal. En la publicación se incluirá el presente auto.

En la diligenciación se establecen los términos y plazos para la ejecución de la medida cautelar.

La ejecución se hará en el momento previsto en el art. 228 de la Ley 1438 de 2011, es decir dentro de 60 días inmediatos a la anterior a la celebración de la audiencia oficial, mediante la remisión de las facultades previstas en la legislación.

Al pleno cumplimiento de la medida se procederá a su inmediata servidumbre. Segundo. La medida se aplicará en la Vía Pública y se extenderá a los siguientes efectos:

1.º) A través de la página web www.radicional.gov.co/tribunal-administrativo o en la dirección www.radicional.gov.co/tribunal-administrativo/estados-electronicos.

2.º) A través de la medida de acuerdo con lo establecido en la Sección Tercera de la legislación que regula la ejecución de los mandamientos judiciales, disponiendo que las causas de ejecución se inicien, de acuerdo con lo establecido en la legislación que regula la ejecución de los mandamientos judiciales, en el término de 60 días, contados a partir de la fecha en la cual la autoridad judicial o el juez que ordenó la medida, según sea el caso,

Algunas consideraciones sobre la demanda fiscal:

1. La demanda fiscal es un procedimiento previsto en el art. 175 del C.P.A.

- (1) el demandado deberá aportar con la celeridad debida la documentación y las pruebas que tienen en su poder y que consideran necesarias para su defensa. El incumplimiento de esta obligación tiene como consecuencia las sanciones previstas en la ley;
- (2) la aplicación de los principios de acuerdo, amistad y voluntariedad de tutela judicial activa y prevalencia de sus intereses;
- (3) la demanda fiscal es un procedimiento que se aplica a la audiencia del demandado, que se celebra en el domicilio del demandado, mediante la convocatoria del juez (JAN), el fiscal (SFC) o el abogado (Abogado de la Defensa - AD), por el medio de la citación judicial.

2. Enviar a la Registraduría Municipal de Roberto Payán (Tunino), por correo, con destino al procedimiento referido, la demanda fiscal.

3. La audiencia del demandado se realizó el día 01 de noviembre de 2010, mediante la convocatoria del juez (JAN), el fiscal (SFC) y el abogado (Abogado de la Defensa - AD), por el medio de la citación judicial.

4. Participaron en la audiencia los representantes de las partes que participaron en la votación, los miembros de los jurados de votación y el día 27 de octubre de 2010, en las veredas de la vereda Corregimiento (Corregimiento 15, zona 9) y el Llano (Corregimiento 14, zona 10), Municipio de Roberto Payán (M).

5. Medidas y protocolos adoptados para la prevención de la violencia o salvaguardia de los votantes. Las votaciones fueron realizadas en el Municipio de Roberto Payán, específicamente en la vereda Corregimiento 15, zona 10, vereda Llano, municipio de Roberto Payán, en la vereda Corregimiento 14, zona 10, vereda Tunino, municipio de Roberto Payán.

12.2. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que remita con destino al proceso de la referencia lo siguiente:

- Informe sobre las denuncias presentadas por los señores Edwin Alexander Quiñones Castillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 1089555781, señora Lorena Alexandra Castillo Cabeza, identificada con cédula de ciudadanía No. 1089540890. Así como del Director de Elecciones para Nariño señor Darío Álvarez adscrito a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre las irregularidades presentadas en las elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019 en el Municipio de Roberto Payán. Deberá indicar el estado en que se encuentra y las decisiones que se han emitido al respecto.

12.3. Oficiar al Ejército Nacional, para que remita con destino al proceso de la referencia lo siguiente:

- Informe qué grupos al margen de la ley ocupan la zona del Municipio de Roberto Payán (N), específicamente en las Veredas y/o corregimientos de Gómez Jurado y Arteaga Limonar.
- Informe si para el día 27 de octubre del 2019, específicamente en las Veredas y/o corregimientos de Gómez Jurado y Arteaga Limonar del Municipio de Roberto Payán, se presentaron alteraciones al orden público, precisando qué tipo de alteraciones.

12.3. Oficiar a la Defensoría del Pueblo, para que remita con destino al proceso de la referencia lo siguiente:

- Informe de Alerta Temprana No. 035-19 Riesgo Electoral 2019 de fecha 31 de agosto de 2019.
- Informar sobre actos de violencia sobre nominadores, electores o autoridades electorales o actos de violencia o sabotaje contra

documentos, elementos o material electoral, sistemas de información, trasmisión o consolidación de resultados de las elecciones, que se hayan presentado en el Municipio de Roberto Payán (N), específicamente en las Veredas y/o corregimientos de Gómez Jurado y Arteaga Limonar.

Notifíquese y Cúmplase.

Los Magistrados,

PAULO LEÓN ESPAÑA PANTOJA

SANDRA LUCIA OJEDA INSUASTY

Con Permiso
ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BARINAS
SECRETARÍA
NOTIFICACIÓN POR ESTADOS
Hoy _____
A las 0 _____
